



Expediente Nº: E/00331/2013

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante D. **C.C.C.** en virtud de denuncia presentada por la **COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXXXXXXXXXX** y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 22 de noviembre de 2012 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la **COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXXXXXXXXXX** (en adelante el denunciante) en el que manifiestan que D. **C.C.C.** (en adelante el denunciado) con domicilio en **B.B.B.)** ha instalado en el rellano de las escaleras del piso 12 cámaras de CCTV sin permiso del resto de propietarios y enfocando al rellano propiedad de la comunidad, sin advertir de la presencia de cámaras y sin inscripción de fichero.

Con fecha 23 de enero de 2013 se remite al denunciante escrito de subsanación y mejora de la solicitud teniendo entrada en esta Agencia escrito de respuesta en fecha 12 de febrero de 2013 en el que aporta fotografías en las que se muestra la ubicación de las dos cámaras objeto de su denuncia.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. Con fecha 25 de marzo de 2013 se solicita información al denunciado por vía postal siendo la misma devuelta por el servicio de correos con la indicación "AUSENTE".

2. Con fecha 5 de agosto de 2013 se reitera por vía postal al denunciado la solicitud de información remitida en fecha 25 de marzo de 2013 siendo devuelta por el servicio de correos con la indicación "AUSENTE REPARTO".

3. Con fecha 13 de septiembre de 2013 se solicita la colaboración de la Policía Local de Logroño teniendo entrada en esta Agencia escrito de respuesta en fecha 5 de noviembre de 2013 en el que se pone de manifiesto:

- El edificio D.D.D., lugar donde se encuentran las cámaras denunciadas, alberga de forma general viviendas destinadas a domicilio particular. Tras consultar con el presidente de la comunidad los Agentes actuantes son informados que en la actualidad no existe actividad mercantil y que el inmueble está destinado a alquiler como vivienda.
- Tras varios intentos de localizar al denunciado realizaron averiguaciones para localizar el domicilio del denunciado resultando que el mismo, es ajeno al ámbito de competencia de la Policía Local de Logroño.
- Con relación a las cámaras existentes en el inmueble la Policía manifiesta que:

- o Existen cámaras dentro de las zonas comunes del edificio D.D.D. y cartel de zona videovigilada. Aportan fotografías de las cámaras y del cartel de zona videovigilada.
- o En la planta número 12 se observa la existencia de un sistema de videovigilancia compuesto de dos videocámaras situadas en el exterior de la vivienda, en la zona del distribuidor de la planta no observándose carteles de zona videovigilada. En el momento de la inspección, las cámaras estaban enfocadas al techo y a tenor de los parches que se observan en el techo, las cámaras pudieron haber estado instaladas en lugar distinto del actual.

No es posible acceder al interior de la vivienda no pudiéndose determinar si existe actualmente visionado o grabación de las imágenes captadas por dichas cámaras o si el acceso a las imágenes es remoto o local. Las cámaras según informa la Policía de Logroño se encuentran dirigidas hacia el techo.

- Adjuntan reportaje fotográfico en el que se muestran dos cámaras (imágenes 7 a 14) que coinciden con las imágenes aportadas por el denunciante en cuanto a su morfología y ubicación. Ambas cámaras, según muestran las fotografías, se encuentran orientadas hacia el techo por lo que sería imposible que en el caso que las cámaras se encontraran en funcionamiento captaran imágenes de las personas que transitan por las zonas comunes del inmueble.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo, procede situar la materia de videovigilancia en su contexto normativo. Así el artículo 1 de la LOPD dispone: *“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”*

En cuanto al ámbito de aplicación de la LOPD, el artículo 2.1 de la misma señala: *“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”*, definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado a) del artículo 3 de la LOPD, como *“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.

El artículo 3 de la LOPD define en su letra c) el tratamiento de datos como aquellas *“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que*

permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

El artículo 5.1. f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: *“Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.*

En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.a) de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal *“toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.* Asimismo, el Considerando 26 de esta Directiva se refiere a esta cuestión señalando que, para determinar si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para identificar a aquélla.

La Exposición de Motivos de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de esta Agencia Española de Protección de Datos, relativa al tratamiento de los datos con fines de videovigilancia señala que: *“La seguridad y la vigilancia, elementos presentes en la sociedad actual, no son incompatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal, lo que en consecuencia exige respetar la normativa existente en materia de protección de datos, para de esta manera mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático”.* Sigue señalando: *“Las imágenes se consideran un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999...”.*

La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación.

Por su parte, la citada Instrucción 1/2006, dispone en su artículo 1.1 lo siguiente:

“1. La presente Instrucción se aplica al tratamiento de datos personales de imágenes de personas físicas identificadas o identificables, con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras y videocámaras.

El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación, captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas.

Se considerará identificable una persona cuando su identidad pueda determinarse mediante los tratamientos a los que se refiere la presente instrucción, sin que ello requiera plazos o actividades desproporcionados.

Las referencias contenidas en esta Instrucción a videocámaras y cámaras se entenderán hechas también a cualquier medio técnico análogo y, en general, a cualquier sistema que permita los tratamientos previstos en la misma.” (el subrayado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

La Instrucción 1/2006 en su artículo 2 establece lo siguiente:

“1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia.”

De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable, por lo que la imagen de una persona física identificada o identificable constituye un dato de carácter personal.

De acuerdo con los preceptos transcritos, la cámara reproduce la imagen de los afectados por este tipo de tratamientos y, a efectos de la LOPD, la imagen de una persona constituye un dato de carácter personal, toda vez que la información que capta concierne a personas que las hacen identificadas o identificables y suministra información sobre la imagen personal de éstas, el lugar de su captación y la actividad desarrollada por el individuo al que la imagen se refiere.

III

En el presente expediente la **COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXXXXXXXXXX** denuncia la existencia de dos cámaras de videovigilancia en el rellano de las escaleras del piso nº 12, sin permiso de la comunidad y enfocando al mismo rellano comunitario.

Con fecha 25 de marzo de 2013 se solicita información, por parte de los Servicios de Inspección de esta Agencia, al denunciado por vía postal siendo la misma devuelta por el servicio de correos con la indicación “AUSENTE”.

Con fecha 5 de agosto de 2013 se reitera por vía postal al denunciado la solicitud de información remitida en fecha 25 de marzo de 2013, siendo devuelta por el servicio de correos con la indicación “AUSENTE REPARTO”.

Con fecha 13 de septiembre de 2013 se solicita la colaboración de la Policía Local de Logroño, al objeto de realizar las averiguaciones oportunas respecto al sistema de

videovigilancia denunciado, teniendo entrada en esta Agencia escrito de respuesta en fecha 5 de noviembre de 2013 en el que se pone de manifiesto que el edificio **D.D.D.**, lugar donde se encuentran las cámaras denunciadas, alberga de forma general viviendas destinadas a domicilio particular. Tras consultar con el presidente de la comunidad los Agentes actuantes son informados que en la actualidad no existe actividad mercantil y que el inmueble está destinado a alquiler como vivienda. Con relación a las cámaras denunciadas, la Policía manifiesta que en la planta número 12 se observa la existencia de un sistema de videovigilancia compuesto de dos videocámaras situadas en el exterior de la vivienda, en la zona del distribuidor de la planta, no observándose carteles de zona videovigilada. En el momento de la inspección, las cámaras estaban enfocadas al techo y a tenor de los parches que se observan en el techo, las cámaras pudieron haber estado instaladas en lugar distinto del actual. Asimismo manifiestan que no es posible acceder al interior de la vivienda no pudiéndose determinar si existe actualmente visionado o grabación de las imágenes captadas por dichas cámaras o si el acceso a las imágenes es remoto o local.

Los agentes actuantes adjuntan reportaje fotográfico en el que se muestran dos cámaras que coinciden con las imágenes aportadas por el denunciante en cuanto a su morfología y ubicación. Ambas cámaras, según muestran las fotografías, se encuentran orientadas hacia el techo por lo que sería imposible que, en el caso que las cámaras se encontraran en funcionamiento, captaran imágenes de las personas que transitan por las zonas comunes del inmueble.

Por lo tanto, a la fecha de la visita de inspección por el citado cuerpo, por un lado no se pudo constatar que las cámaras objeto de denuncia estuvieran en funcionamiento y captaran imágenes vulnerando la normativa de protección de datos; por otro lado, según informan los agentes actuantes, las citadas cámaras estaban enfocadas hacia el techo, por lo que sería imposible que en el caso de que las cámaras se encontraran en funcionamiento captaran imágenes de personas físicas identificadas o identificables que transitaran por las zonas comunes del inmueble.

A este respecto, no puede obviarse que al Derecho Administrativo Sancionador le son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, resultando clara la plena virtualidad de los principios de presunción de inocencia. La presunción de inocencia debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, pues el ejercicio del *ius puniendi* en sus diversas manifestaciones está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990 considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta *“que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”*. De acuerdo con este planteamiento,

el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en lo sucesivo LRJPAC), establece que *“Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia.”*

Conforme señala el Tribunal Supremo (STS 26/10/98) el derecho a la presunción de inocencia *“no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.”*

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 24/1997, tiene establecido que *“los criterios para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y las simples sospechas se apoyan en que:*

a) La prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados.

b) Los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios (hechos completamente probados) a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria (SSTC 174/1985, 175/1985, 229/1988, 107/1989, 384/1993 y 206/1994, entre otras).”

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20/02/1989 indica que *“Nuestra doctrina y jurisprudencia penal han venido sosteniendo que, aunque ambos puedan considerarse como manifestaciones de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre el derecho a la presunción de inocencia, que desenvuelve su eficacia cuando existe una falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales y el principio jurisprudencial in dubio pro reo que pertenece al momento de la valoración o apreciación probatoria, y que ha de juzgar cuando, concurre aquella actividad probatoria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.”*

En definitiva, aquellos principios impiden imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y acreditado una prueba de cargo acreditativa de los hechos que motivan esta imputación o de la intervención en los mismos del presunto infractor, aplicando el principio *“in dubio pro reo”* en caso de duda respecto de un hecho concreto y determinante, que obliga en todo caso a resolver dicha duda del modo más favorable al interesado.

A la vista de lo expuesto, al no haberse acreditado la captación o grabación de imágenes de datos personales por parte del denunciado al margen de la normativa de protección de datos y atendiendo al principio de presunción de inocencia, procede el archivo del presente expediente de actuaciones previas.

No obstante, y a pesar de que se proceda al archivo del presente expediente, por los motivos expuestos, resultaría plenamente fundada la imposición de una sanción si en el futuro continuaran las cámaras enfocando otros espacios diferentes a la propia vivienda, pues tal circunstancia podría constituir prueba indiciaria suficiente para determinar que las citadas cámaras se encuentran en funcionamiento y enervar el principio de presunción de inocencia, pudiendo imputarse la comisión de las infracciones que resulten de la aplicación de la LOPD.

Asimismo, se informa que si el denunciado procediera a reorientar las cámaras hacia zonas comunes del inmueble, sin cumplir los requisitos exigidos en materia de protección de datos, podrá la Comunidad proceder a efectuar una nueva denuncia que daría lugar a la apertura de un nuevo expediente de actuaciones previas.

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. **PROCEDER AL ARCHIVO** de las presentes actuaciones.
2. **NOTIFICAR** la presente Resolución a D. **C.C.C.** y a **COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXXXXXXXXX**.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

José Luis Rodríguez Álvarez
Director de la Agencia Española de Protección de Datos